



Piden al Gobierno que aplaze la Selectividad

País Vasco, Cataluña, Murcia y Galicia reclaman una moratoria y CCAA del PP amenazan con plantarse

OLGA R. SANMARTÍN MADRID

La nueva Selectividad que prepara el Gobierno suscita dudas entre las CCAA. País Vasco (PNV) y Cataluña (ERC) pidieron ayer al Gobierno una moratoria para que se aplique de forma más escalonada. Su propuesta fue secundada por regiones como Galicia y Murcia (PP). De forma paralela, Castilla y León, Galicia, Madrid y Andalucía amenazaron con dejar plantado al Gobierno en su negociación porque dicen que el equipo de Pilar Alegría «no es receptivo a ninguna» de sus propuestas, que pasan por la existencia de una única prueba de acceso a la universidad, la misma en toda España.

Alegría y su número dos, José Manuel Bar, se reunieron ayer con las CCAA en la Conferencia Sectorial de Educación. La cita iba a ser rutinaria, pero Madrid y Andalucía pidieron que en el orden del día se incluyera también el debate de la nueva Selectividad, que comenzará a ponerse en marcha en 2024, aunque el próximo junio ha-

brá ya la primera prueba piloto, sin efectos académicos. El secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, ha iniciado una gira por España para convencer a todos los gobiernos autonómicos de la necesidad de alcanzar un acuerdo en torno a la Evau, Ebau, Abau o Pau, como se llama ahora en los distintos territorios.

La nueva normativa tiene que estar lista para primavera. Se prevé un primer periodo transitorio entre los cursos 2023/24 y 2025/26 y una implantación definitiva a partir del curso 2026/27. País Vasco pidió alargar un año más el periodo transitorio, una propuesta que también compartió Cataluña y que apoyaron Galicia y Murcia, según fuentes presentes en el encuentro, que se celebró de forma telemática.

Cataluña y el País Vasco no son partidarias de hacer la prueba única en toda España que demandan las regiones del PP. Todas menos Murcia lanzaron un ultimátum al Gobierno porque las tres veces

que se ha reunido el grupo de trabajo «el Ministerio no es receptivo a ninguna de las propuestas y no hay diálogo». «Se nos está usando como excusa. Esto hace difícil que podamos seguir participando en el grupo si no se corrige el rumbo. Se nos hace difícil e incómodo hacernos responsables del diseño final de un modelo que no arregla las desigualdades, sino que las incrementa», señalaron fuentes cercanas al consejero de Galicia, Román Rodríguez.

También la consejera de Castilla y León, Rocío Lucas, lamentó que no se hayan tenido en cuenta sus observaciones y anunció que, «si el Ministerio persiste en avanzar en esta dirección», se «desligará del diseño del nuevo sistema».

En la misma línea, la consejera de Andalucía, Patricia del Pozo, expuso «la dificultad de seguir colaborando cuando el punto de partida no es una prueba homogénea en todo el país».

Madrid había planteado como alternativa una doble vía: una

prueba única para los que no estudien en su región y una autonómica para los que se queden. El consejero madrileño, Enrique Osorio, dijo que «el Ministerio hace dejación de sus competencias» y que se está «tratando de forma injusta a una parte del alumnado» porque tanto las pruebas actuales como las que prepara el Gobierno tienen distinto nivel de dificultad en función de los territorios aunque la nota que obtiene un alumno en una región le sirve para entrar en la universidad de cualquier lugar de España.

Murcia vislumbra una «rebaja de la exigencia» en el nuevo examen y por eso se apunta a la petición de moratoria, aunque no al ultimátum. La consejera, Mabel Campuzano, ex de Vox, no estuvo de hecho en la reunión que se celebró por la mañana en la sede del PP de Génova. En ella, los representantes de Madrid, Galicia, Castilla y León y Andalucía decidieron que no van a «consentir más el ninguneo de la ministra».